

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Por sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT I-235-2022, se acogió sin costas la reclamación de multa interpuesta, dejándose sin efecto las Resoluciones N^{os} 8600/22/35 y 8653/22/32 dictadas por la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Poniente el 23 y el 17 de junio de 2022, respectivamente.

En contra de este fallo la reclamada ha deducido recurso de nulidad por la causal del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, por estimar que la sentencia se dictó con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia respectiva, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

primero: Que la parte reclamada funda su recurso en la causal de nulidad de la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo y alega que la infracción de ley se verifica respecto de los dos argumentos centrales que fundamentan la sentencia y que llevan a acoger las reclamaciones sobre resoluciones de multa y corresponden, por una parte, a la presunta ilegalidad del Ordinario N° 503 de la Dirección del Trabajo, en cuanto a la errónea interpretación de lo dispuesto en el artículo 503 inciso tercero del Código del Trabajo y, en subsidio de aquella, en relación a una errónea interpretación del artículo 11 letra c) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967; y, por otra, respecto a la legalidad de la estipulación relativa al cargo de “operador de tienda” y “operador sala de ventas”, configurando una errónea interpretación del artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo.

En relación con la primera infracción anotada se denuncia que el fallo incurre en una errónea interpretación del inciso tercero del artículo 503 del Código, toda vez que la acción contemplada en dicha norma solo permite impugnar la resolución de multa administrativa objeto de la reclamación, ya



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KNMKXPXTXBU

sea porque existe algún error de hecho o de derecho, y no puede alcanzar a otro tipo de pronunciamientos dictados por la Inspección del Trabajo, tal como pretende la reclamante al impugnar la legalidad del Ordinario.

En subsidio de la infracción anterior, se reclama trasgresión de la letra c) del artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, toda vez que la sentenciadora estimó que el pronunciamiento expresado en el Ordinario N° 503, respecto de la infracción del artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, en relación al cargo de “operador de tienda” y “operador sala de ventas”, no cumpliría con los requisitos establecidos en la mencionada norma, al constituir un cambio de doctrina del ente fiscalizador y al no estar suscrito por el Director del Trabajo, considerándolo sólo una opinión del Director Jurídico, que no permitiría fundar las multas aplicadas.

A su juicio de la parte que recurre dicha interpretación es errada, pues el Ordinario cuestionado se limita a reiterar la doctrina que la Dirección del Trabajo ha mantenido respecto de la polifuncionalidad desde hace ya largo tiempo, por lo que no existiendo una innovación en la interpretación sostenida por la Dirección del Trabajo no puede pretenderse que la dictación del Ordinario N° 503 sea de competencia exclusiva del Director para que pueda ser empleado por los funcionarios de la Inspección del Trabajo en su labor fiscalizadora.

En adición a las infracciones anteriores reprocha que el fallo vulnera el N° 3 del artículo 10 del Código, toda vez que a función de “operador de tienda” no cumple con ninguna de las exigencias contempladas en dicha norma, tal como consigna el Ordinario N° 503, y por ello estima que el tribunal infringió la norma citada al afirmar que la sola existencia de la cláusula de operador y las labores que contempla no resultan suficientes para establecer la infracción, en circunstancias que, en su concepto, la redacción de la cláusula en que se indica el cargo comprende prácticamente todas las funciones que actualmente se desarrollan en los supermercados Rendic Hermanos S.A.

Segundo: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 477 del Código del Trabajo, el recurso de nulidad procede cando la sentencia



definitiva “se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

Pues bien, en términos simples, la causal de nulidad señalada resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia. Ello puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley, o sea, aquéllos en que el fallo prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso, en los casos de errónea interpretación de la ley, esto es, cuando la sentencia da al precepto legal un alcance diverso a aquel que debía haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación de la ley que se establecen en los artículos 19 a 24 del Código Civil, y en los casos en que hay falsa aplicación de la ley, defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o cuando la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.

Tercero: Que el fallo objeto del recurso establece que “todas las funciones indicadas en los contratos se enmarcan en la función de atención de público, sea para la atención directa de las personas que concurren a la sala de tienda, sea para la preparación, pago y entrega de los productos que la demandada comercializa, el abastecimiento y limpieza de los mismos, y todo otro asunto relacionado con el servicio al cliente, funciones cuyo carácter no es taxativo”. Seguidamente la sentenciadora indica que “excediéndose de sus facultades el Inspector no constató hechos o situaciones, sino que se avocó a contrastar los contratos que tuvo a la vista con la opinión manifestada por el Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, plasmada en el Ordinario N° 503 de 30 de marzo de 2022, no suscrito por el Director del Trabajo, respecto de materias que no han sido objeto de ley, con infracción a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2.

En consecuencia, finaliza el fallo, los hechos constatados -esto es, la sola existencia de la cláusula de operador y las labores que contempla- no resulta suficiente para establecer la infracción al artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, razón por la cual se concluye que la Inspección del Trabajo cursó las multas aplicando en forma directa una opinión del Departamento



Jurídico, lo que torna en manifiestamente ilegal las resoluciones de multa, en tanto el aludido Departamento no pudo legalmente complementar las instrucciones impartidas por el Director del Trabajo en relación a la naturaleza de las funciones de los operadores de tienda, como se menciona en las resoluciones de multa.

Cuarto: Que sin perjuicio de estas consideraciones de índole jurídico que se contienen en el fallo impugnado, debe también tenerse presente para la resolución del recurso que no se controvirtió y, por consiguiente, pueden estimarse como hechos de la causa aquellos que señalan las resoluciones de multa reclamadas, sin perjuicio de las calificaciones de naturaleza también jurídica que de ellos se efectúe.

De acuerdo a lo expuesto en la primera de esas resoluciones, la multa se cursó por no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios, respecto a los trabajadores que se detallan más adelante, al ser ambigua lo expuesto y no existir certeza jurídica de la prestación de servicios, según el siguiente detalle: contratos de trabajo establecen que los trabajadores se comprometen a ejecutar sus servicios personales en el cargo de “Operador Tienda”, y sin que la enunciación sea taxativa, el cargo comprende todas las acciones que conlleva la operación del local esto es atender o asistir al cliente en su compra; vender, reponer, trasladar, eliminar productos; desechar, asear, ordenar, retirar y cambiar mermas; recepcionar, inventariar, preparar, pesar, envasar y/o guardar todo tipo de productos o mercaderías perecibles y no perecibles; hornear, preparar, clasificar, refrigerar todo tipo de productos perecibles, así como también, mantener las instalaciones en perfectas condiciones de orden y limpieza, además de cambiar precios y recepcionar mercadería en casos que corresponda. El trabajador en el desempeño de su cargo, y sin perjuicio de las funciones y obligaciones que sean propias o inherentes a su ejercicio, así como aquellas funciones que se encuentren señaladas en los reglamentos, políticas y/o instrucciones que a su respecto le imparta la empresa, deberá ejecutarlas en forma alternativa o complementaria una de otras, sin que importe un menoscabo para el trabajador. Las funciones señaladas en los incisos anteriores se realizarán en



las siguientes secciones del establecimiento: abarrotes, reposición de mercaderías, pasillos, pgc y non-food, recepción, bodegas de acopio, cámaras de frío, servicio al cliente, lácteos y congelados, platos preparados, asaduría, fiambrería, rotisería, carnicería, panadería, pastelería, frutas y verduras y otras de similar naturaleza.

De acuerdo la segunda, la multa se impone esta vez por no especificar en el contrato de trabajo de ciertos trabajadores con cargos “Operador Sala Ventas” y “Operador Tienda” la determinación precisa de la naturaleza de los servicios, al ser ambiguo lo expuesto y no existir certeza jurídica de la prestación de servicios, según el siguiente detalle: de acuerdo con lo señalado en el Ord. N° 503 de fecha 30/03/2022, del Jefe Del Departamento Jurídico y Fiscalía de la Dirección del Trabajo, es posible desprender que, no cumplen con la normativa laboral los cargos denominados "Operador Sala Ventas" y “Operador Tienda”, ya que las cláusulas genéricas o amplias podrían dejar al arbitrio del empleador las labores a desarrollar, o bien, funciones indeterminadas o cualquiera otra que no otorgue certeza al dependiente de las tareas específicas que se obliga a realizar para obtener el pago de su remuneraciones, es decir, no hay certeza respecto a las tareas que deberá desarrollar el trabajador en ejecución de la obligación contractual (las cuales pueden ser “caja”, “reposición de productos”, “cocina” y “limpieza”, entre otras), mismas por las que deberá ser remunerado”.

Quinto: Que el artículo N° 3 del artículo 10 del Código del Trabajo dispone que el contrato de trabajo debe contener, entre otras estipulaciones, la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse, añadiendo que podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias.

Por su parte, el inciso primero del artículo 505 del mismo cuerpo legal prescribe que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen. Esta norma debe complementarse con la del artículo 503, cuyo inciso primero señala que las sanciones por infracciones a la



legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente.

Ahora, de la inteligencia armónica de estos último dos preceptos es posible concluir que los inspectores del trabajo, en tanto funcionarios que forman parte de la Dirección del Trabajo están facultados por la ley no sólo para fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales, sino para también, en ejercicio de esta potestad, interpretarla y ello evidentemente no importa en lo absoluto arrogarse una potestad de la que carecen, específicamente una que es propia de la jurisdicción, como algún tiempo se sostuvo en una interpretación que hoy ha sido superada. En efecto, la aplicación de la ley supone siempre y en todo caso su interpretación, esto es, el esclarecimiento de su sentido y alcance, pues resulta absurdo sostener que pueda determinarse si la ley ha sido bien o mal aplicada si no se sabe qué ha querido decir. Cuestión distinta y que sí importaría una intromisión indebida a la labores propias de los tribunales de justicia sería pretender que la autoridad administrativa, en el ejercicio de su rol fiscalizador, decidiera cuestiones controvertidas entre partes.

Sexto: Que, en este entendido, en el caso de la especie los fiscalizadores en caso alguno han actuado sobrepasado las facultades que les confiere su condición de tales y se han limitado a constatar lo que señalan los contratos de trabajo de determinados empleados de la sociedad reclamante en lo que a la determinación de la naturaleza de los servicios se refiere y en una interpretación razonable de la norma legal que indica cómo debe ser ésta, han estimado que no la satisface, imponiendo en consecuencia la multa por infracción a la misma ley, invocando un Ordinario del Jefe del Departamento Jurídico y Fiscalía de la Dirección del Trabajo únicamente en apoyo de esa conclusión.

Pues bien, la Corte comparte la apreciación del funcionario fiscalizador por cuanto efectivamente la determinación de la naturaleza de los servicios en los contratos revisados no puede estimarse que satisfaga la exigencia del citado N° 3 del artículo 10, en tanto, como se vio en la transcripción efectuada en el motivo Cuarto de este fallo, se prevé que los



trabajadores atiendan y asistan a los clientes, vendan, repongan, trasladen y eliminen productos, desechen, asean, ordenen, retiren y cambien mermas, reciban, inventaríen, preparen, pesen, envasen y/o guarden todo tipo de productos o mercaderías perecibles y no perecibles, cambien precios, horneen, preparen, clasifiquen, refrigeren todo tipo de productos perecibles, así como también mantengan las instalaciones en perfectas condiciones de orden y limpieza.

Como se vio, la ley exige determinación de la naturaleza de los servicios y ello no quiere significar únicamente enunciación o enumeración, sino también precisión, exactitud, claridad y especificidad, pues sólo de esta forma el trabajador tiene certeza de las tareas que se obliga a realizar para obtener el pago de su remuneraciones o dicho de otro modo, tiene certidumbre de aquello que debe hacer para cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del contrato de trabajo y que lo legitiman para exigir la contraprestación.

Séptimo: Que, en razón de lo anterior, no cabe sino concluir que el tribunal *a quo* incurrió en error de derecho al concluir que la Inspección del Trabajo contravino la ley al imponer las multas objeto de la reclamación, de manera tal que por configurarse el supuesto de la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, el recurso de nulidad debe ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 477, 478, 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **acoge** el recurso de nulidad deducido por la reclamada contra la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en los autos RIT I-235-2022, la que se invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda, quien no firma por ausencia.

Laboral-Cobranza N° 2950-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KNMKXPXTXBU



Lidia Virginia Poza Matus

Ministro(S)

Corte de Apelaciones

Cinco de septiembre de dos mil veinticuatro
11:33 UTC-4



Paola Cecilia Diaz Urtubia

Ministro(S)

Corte de Apelaciones

Cinco de septiembre de dos mil veinticuatro
10:34 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KNMKXPXTXBU

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Suplentes Lidia Poza M., Paola Cecilia Díaz U. Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KNMKXPXTXBU

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se dicta el siguiente fallo de reemplazo.

Vistos:

De la sentencia anulada se reproduce su parte expositiva, considerativa y las citas legales, con excepción de los motivos Octavo a Décimo.

Y se tiene además presente:



Que las consideraciones expresadas en los motivos Tercero a Sexto del fallo de nulidad que antecede, que se tienen por reproducidas en esta parte, permiten concluir que la Inspección del Trabajo no contravino la ley al imponer las multas en las resoluciones impugnadas, de manera tal que reclamo que dio origen al pleito debe ser desestimado. No obstante lo anterior, se liberará a la reclamante del pago de las costas de la causa, por estimarse que litigó con fundamento plausible.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, se **rechaza** el reclamo deducido Rendic Hermanos S.A. en lo principal de la presentación de 22 de julio de 2022, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda, quien no firma por ausencia.

Laboral-Cobranza N° 2950-2023.

| | |
|--|---|
| <div></div> <div>Lidia Virginia Poza Matus Ministro(S) Corte de Apelaciones Cinco de septiembre de dos mil veinticuatro 11:33 UTC-4</div> <div></div> | <div></div> <div>Paola Cecilia Diaz Urtubia Ministro(S) Corte de Apelaciones Cinco de septiembre de dos mil veinticuatro 10:34 UTC-4</div> <div></div> |
|--|---|

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Suplentes Lidia Poza M., Paola Cecilia Díaz U. Santiago, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QEVJXPYTXBU